

URUGUAY: INFORME DE 2020 SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Resumen

La Constitución establece la libertad religiosa y afirma que el Estado no apoya ninguna religión en particular. Las normas legales prohíben la discriminación basada en la religión. El compromiso oficial del gobierno con la laicidad siguió generando controversia entre grupos religiosos y líderes políticos. A fin de año, la Fiscalía General de la Nación seguía investigando el caso de un profesor de un liceo público que hizo varias publicaciones en redes sociales donde negaba que hubiera existido el Holocausto. En marzo, el gobierno suspendió todas las reuniones públicas, incluidas las religiosas, de acuerdo con estrictos protocolos sanitarios para mitigar la pandemia de COVID-19. Algunos líderes religiosos cuestionaron la autoridad del gobierno para limitar su derecho a practicar la religión a través de decretos y protocolos. Según algunos grupos religiosos, el gobierno no les consultó mientras redactaba las medidas contra la COVID-19 (si bien consultó a otros grupos religiosos), y los protocolos favorecieron a algunos grupos por sobre otros. Las organizaciones religiosas siguieron destacando la necesidad de que haya más vías de comunicación y oportunidades de diálogo con el gobierno para hablar sobre temas vinculados a la libertad religiosa. En enero, el gobierno adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

Representantes de la comunidad judía siguieron denunciando actividad en la prensa y comentarios en redes sociales que denigraban sus creencias y prácticas religiosas. Una pareja judía recibió comentarios antisemitas y amenazantes de un hombre que les vendió un libro escrito por un autor judío a través de una plataforma digital. La pareja denunció el incidente a las autoridades, que acusaron al hombre por delitos de odio. A fin de año, el hombre estaba esperando el inicio de su juicio con arresto domiciliario y una orden de restricción que le prohíbe acercarse a la pareja. Miembros de la comunidad musulmana siguieron indicando que en ocasiones fue difícil convencer a empleadores del sector privado de respetar los horarios de oración durante el horario de trabajo y obtener permiso para salir del trabajo más temprano para asistir a los rezos los viernes. Grupos religiosos siguieron promoviendo el diálogo, el entendimiento y la coexistencia interconfesional en el país.

Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de América dialogaron sobre la interpretación del concepto de laicidad del gobierno, la falta de un homólogo en el gobierno que esté a cargo de temas religiosos, y la importancia de la tolerancia hacia las minorías religiosas y la colaboración interconfesional con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Comisión Honoraria Contra el Racismo, la

Xenofobia y Toda Forma de Discriminación (CHRXD) y de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Asimismo, se reunieron con representantes protestantes, católicos, judíos y musulmanes, con representantes de otros grupos religiosos minoritarios y con miembros del Foro Interreligioso del Uruguay, para conocer su opinión sobre las actitudes del gobierno para con la religión y los grupos religiosos y el impacto de la pandemia de COVID-19 en la capacidad de practicar sus religiones. La embajada siguió utilizando las redes sociales para destacar la importancia del respeto a la diversidad religiosa y de la tolerancia religiosa.

Sección I. Demografía religiosa

El Gobierno de los Estados Unidos estima que la población total de Uruguay es de 3,4 millones de personas (estimación a mediados de 2020). Según una encuesta realizada en 2014 por Pew Research Center, un 57 % de la población se autoidentifica como cristiana (42 % católicos y 15 % protestantes), un 37 % de la población se considera religiosa pero sin afiliación y un 6 % eligió otra opción. Los grupos religiosos minoritarios, que representan en su conjunto menos de un 5 % de la población, incluyen a los Testigos de Jehová, los baha'ís, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Evangélica Valdense, los afroumbandistas (que combinan elementos del catolicismo con el animismo y creencias africanas e indígenas), los budistas, la Federación de Familias para la Paz y la Unificación del Mundo (Iglesia de Unificación) y Brahma Kumaris, entre otros. Según la encuesta, 0,3 % de la población es judía, 0,1 % hinduista y 0,1 % musulmana. Otras estimaciones sobre la población judía del país van desde 12.000 a 30.000 personas, de acuerdo con el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT y el Comité Central Israelita del Uruguay, respectivamente. Expertos de la sociedad civil estiman que hay entre 700 y 1.500 musulmanes, quienes viven principalmente cerca de la frontera con Brasil.

Sección II. Situación del respeto del gobierno hacia la libertad religiosa

MARCO LEGAL

La Constitución establece la libertad religiosa y afirma que “el Estado no sostiene religión alguna”. El Código Penal prohíbe la discriminación basada en la religión.

Una ley llama a la celebración anual de la laicidad, algo que se ha conmemorado el 19 de marzo.

La Constitución reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional,

exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos.

Los grupos religiosos tienen derecho a exoneraciones de contribución inmobiliaria solo para sus iglesias o templos. A los efectos de recibir dichas exoneraciones, el grupo religioso debe solicitar su inscripción como entidad sin fines de lucro ante el Ministerio de Educación y Cultura. Dicha solicitud debe ser aprobada para recibir las exoneraciones. El ministerio, en general, los registra y, una vez completado el trámite, el grupo puede solicitar la exoneración de la contribución inmobiliaria ante la entidad correspondiente (el gobierno municipal).

Cada gobierno departamental regula el uso de sus tierras públicas para entierros. Muchos departamentos permiten entierros, servicios y ritos de todas las religiones en sus cementerios públicos. Sin embargo, las normas de salud pública requieren que los entierros se hagan en ataúdes.

La INDDHH, un órgano autónomo del Parlamento, y la CHRXD se encargan de controlar el cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias por parte del gobierno. Ambas organizaciones reciben denuncias de discriminación, llevan adelante investigaciones y emiten dictámenes independientes al respecto. Estos dictámenes incluyen una recomendación sobre si el caso debe someterse a una audiencia judicial o administrativa. Solo los juzgados o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pueden establecer sanciones o imponer multas por discriminación. La INDDHH y la CHRXD ofrecen servicios letrados gratuitos a los denunciantes.

Un protocolo de las autoridades carcelarias regula los temas religiosos en las cárceles, incluida la estandarización del acceso de referentes religiosos y la existencia de espacios para reuniones religiosas. Varias cárceles del país tienen un espacio exclusivo para prácticas religiosas.

La Constitución prohíbe la instrucción religiosa en las escuelas públicas. Las escuelas públicas cierran en algunos días festivos cristianos. En atención a su naturaleza laica, el gobierno no se refiere a dichos días festivos con sus nombres cristianos. Por ejemplo: Navidad se denomina formalmente "Día de la familia" y Semana Santa se conoce popularmente como "Semana de Turismo". Los estudiantes que pertenecen a grupos religiosos no cristianos o minoritarios pueden faltar a clase sin penalidad en los días de sus celebraciones religiosas. Las escuelas privadas gestionadas por organizaciones religiosas pueden determinar qué días festivos religiosos celebrar.

Al registrarse para recibir reconocimiento y certificación oficial ante el Ministerio de Educación y Cultura, los grupos religiosos pueden recibir beneficios, servicios, reconocimiento y reducciones tributarias del gobierno. Los trabajadores religiosos deben presentar una constancia de la institución religiosa a la que están afiliados que confirme la identidad del solicitante y garantice el apoyo económico al grupo religioso

patrocinante. Según el marco normativo vigente, el Estado debe hacer cumplir estas normas a miembros de todos los grupos religiosos por igual.

El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

PRÁCTICAS DEL GOBIERNO

A fin de año, la Fiscalía General de la Nación seguía investigando el caso de un profesor de un liceo público que hizo varias publicaciones en redes sociales donde negaba que hubiera existido el Holocausto. El Comité Central Israelita del Uruguay presentó una denuncia ante la INDDHH donde denunció al docente y a otras personas que publicaron mensajes en Facebook y Twitter que negaban que hubiera existido el Holocausto y expresaron otros sentimientos antisemitas. La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial del Ministerio del Interior, llevó adelante dos investigaciones independientes a raíz de la denuncia: una del docente y otra de las personas que publicaron otros mensajes antisemitas en redes sociales.

El compromiso oficial del gobierno con la laicidad y cómo afectó a los grupos religiosos siguió generando controversia entre grupos religiosos y líderes políticos. Distintas interpretaciones del término "laicidad" continuaron generando desacuerdos sobre el rol del Estado en la observancia de las leyes de laicidad del país. Varios representantes de grupos religiosos indicaron que las autoridades con frecuencia interpretaban la laicidad como la ausencia de religión, en lugar de la coexistencia de múltiples religiones o creencias y la independencia entre religión y Estado.

Con el objetivo anunciado de mejorar la comprensión de la diversidad religiosa que existe en el país, representantes de varias comunidades religiosas, incluidos católicos, protestantes evangélicos, musulmanes, Brahma Kumaris, la Iglesia de la Unificación, metodistas y la Iglesia de Jesús Cristo siguieron solicitando al gobierno que incluyera información sobre las distintas religiones que tienen presencia en el país en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas.

Algunos grupos religiosos minoritarios no cristianos afirmaron que consideraban que el gobierno favorecía a los cristianos, tal como quedaba demostrado por el hecho de que el gobierno diera nombres laicos oficiales a los días festivos cristianos, lo que automáticamente daba a los cristianos días libres para celebrar sus días festivos. Por ejemplo, la Semana de Pascua se denominó oficialmente "Semana de turismo", mientras los cristianos siguieron refiriéndose a sus días festivos por sus nombres religiosos. Sin embargo, el gobierno no designó como días festivos oficiales los días festivos de otros grupos religiosos, lo que hizo que los fieles de otras religiones tuvieran que pedir un día libre para celebrar sus días festivos.

El 1 de marzo, durante la ceremonia de transmisión de mando presidencial, el Presidente Lacalle Pou participó en un servicio de oración interreligioso en la Catedral

Metropolitana de Montevideo, donde líderes de las Iglesias católica, anglicana, armenia y evangélica protestante, así como de la comunidad judía, oraron por el nuevo presidente. Las redes sociales de la Presidencia de la República publicaron artículos sobre el evento. Miembros de varios partidos políticos, incluidos el Frente Amplio y el Partido Colorado, criticaron la presencia del Presidente y, en particular, la promoción del evento en las redes sociales de Presidencia, por considerar que constituyó una violación de la laicidad establecida en la Constitución.

El 13 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país, los grupos religiosos suspendieron todos los servicios y eventos presenciales, de conformidad con un decreto del gobierno. El 25 de marzo, el Secretario de Presidencia se reunió con líderes de las principales comunidades religiosas para hablar sobre la suspensión de los servicios y las ceremonias religiosas y sobre las limitaciones o modificaciones a otras actividades, como el voluntariado y la participación en tareas comunitarias. Entre los participantes, hubo representantes del Comité Central Israelita del Uruguay, la Comunidad Israelita del Uruguay, la Nueva Congregación Israelita, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica Armenia y la Iglesia Anglicana.

Muchos grupos religiosos organizaron servicios y celebraciones virtuales durante la vigencia del decreto del gobierno. Algunos líderes religiosos cuestionaron la autoridad del gobierno para limitar su derecho a celebrar actividades religiosas públicas a través de decretos y protocolos. El 19 de junio, el gobierno autorizó a los grupos religiosos a organizar servicios y celebraciones presenciales siempre que siguieran protocolos sanitarios específicos que incluían limitaciones en cuanto a la frecuencia, la duración y el tamaño de las reuniones. Aunque el gobierno trabajó con líderes religiosos para redactar los protocolos, representantes de algunos grupos religiosos expresaron su preocupación por el hecho de que ciertos protocolos no eran compatibles con sus prácticas religiosas, que requerían más de la duración permitida de entre 45 y 60 minutos. Algunos representantes de grupos minoritarios afirmaron que no habían sido incluidos en la etapa de redacción de los protocolos, y que dichos protocolos favorecían a algunos grupos religiosos por sobre otros. Representantes de un grupo dijeron que habían solicitado a las autoridades que redactaran un protocolo especial para satisfacer sus necesidades, pero que, a pesar de la respuesta afirmativa inicial del gobierno, a fin de año su solicitud todavía no había sido atendida.

En el departamento de Rivera, donde la prensa informó que hubo más de un brote de COVID-19 como consecuencia de reuniones de grupos afroumbandistas y evangélicos protestantes, las autoridades solicitaron a los líderes religiosos que exhortaran a sus fieles a seguir los protocolos sanitarios, indicando que eso era preferible a tener que multar a los congregantes o cerrar lugares de culto.

Un pico de casos de COVID-19 a fines de diciembre llevó a una reunión virtual entre el Secretario de Presidencia, el Ministro de Salud Pública y representantes de algunos

grupos religiosos. Tras la reunión, el Secretario de Presidencia anunció que habían acordado volver a suspender las reuniones religiosas hasta el 10 de enero de 2021. El Arzobispo de Montevideo dijo que la Iglesia acataría la decisión del gobierno, aunque no estaba totalmente de acuerdo con la suspensión, en particular tan cerca de Navidad. Asimismo, dijo que la Iglesia Católica había seguido estrictamente los protocolos sanitarios para los servicios religiosos durante la pandemia y que no se había informado de ningún brote. Representantes de algunos grupos minoritarios expresaron su disconformidad por no haber sido invitados a la reunión virtual.

Un representante de los afroumbandistas informó que la mayoría de los líderes de su grupo religioso habían alentado a sus fieles a no celebrar ceremonias presenciales desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo dadas las características especiales de sus ceremonias, que implican agarrarse de las manos, cantar y bailar a cortas distancias y compartir bebidas. Los líderes afroumbandistas hablaron sobre un posible protocolo al Ministerio de Salud Pública para retomar sus rituales, pero a fin de año solo habían presentado un borrador. Dada la proximidad de la celebración de *Iemanjá* en febrero de 2021, que lleva a miles de personas a las costas con ofrendas a la Diosa del Mar, un líder del grupo se reunió con el Ministro de Defensa Nacional en diciembre para hablar sobre cómo se podría reducir el riesgo de contagio en las playas públicas durante estos ritos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguió estudiando una petición que habían presentado varias organizaciones evangélicas cristianas en 2019. Según los peticionantes, entre ellos Misión Vida para las Naciones, el gobierno había hecho declaraciones negativas que incitaban al odio contra las iglesias evangélicas y las había discriminado por motivos religiosos.

Según representantes del Centro Islámico Egipcio de Uruguay, durante el año no hubo ningún avance en las obras del terreno cedido al centro en 2019 para construir el primer cementerio islámico del país, ubicado en el departamento de Canelones. Según se informó, la demora se debió a la falta de fondos. Según los medios, el gobierno departamental de Canelones también tiene que revisar algunas normas de salud pública para permitir los entierros islámicos sin ataúd.

Representantes de la comunidad musulmana siguieron informando que las autoridades rara vez ofrecieron en las escuelas públicas comidas adecuadas para niños musulmanes que se rigen por la alimentación halal.

Miembros de la comunidad judía siguieron afirmando que el gobierno debería generar normas que permitan fechas de examen alternativas a nivel universitario para los estudiantes que celebran días festivos religiosos, en lugar de dejar la decisión a criterio de cada docente.

La cantidad total de casos de discriminación por motivos religiosos, una cifra que publica la CHRXD, no estuvo disponible a fin de año. El Ministerio de Relaciones Exteriores siguió gestionando el “Sistema de monitoreo de recomendaciones”, una herramienta informática interinstitucional que se usa para monitorear e informar sobre temas de derechos humanos, incluida la discriminación por motivos religiosos.

Algunos miembros de grupos católicos y evangélicos protestantes siguieron afirmando que las posturas del gobierno respecto de la educación sexual, el género y el aborto que se enseñaban en las escuelas públicas amenazaron su libertad de expresión y su derecho a practicar su religión. Según algunos grupos religiosos, órganos gubernamentales, incluida la CHRXD y la INDDHH, no priorizaron el control de la discriminación por motivos religiosos y en cambio se centraron en lo que el gobierno consideraba preocupaciones de derechos humanos más "urgentes", como los derechos de personas con discapacidades, los afrodescendientes, la comunidad LGBTI, las mujeres, las personas encarceladas, y las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado durante la dictadura militar.

Algunas organizaciones religiosas dijeron que seguían valorando las oportunidades de diálogo directo con el gobierno sobre libertad religiosa, pero informaron que hubo pocos o nulos canales de comunicación formales para plantear preocupaciones generales o debatir iniciativas relacionadas con la libertad religiosa. Sin embargo, afirmaron que un funcionario de Presidencia de la República estuvo disponible para hablar sobre temas vinculados a COVID-19 en lo relacionado con los grupos religiosos. Las organizaciones sugirieron la creación de una institución gubernamental para atender los temas religiosos y actuar como nexo entre grupos religiosos y el Estado.

En enero, el gobierno adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Miembros de la comunidad judía expresaron su apoyo a la decisión del gobierno, incluso mediante comunicados de prensa. Igual que en años anteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó las actividades de conmemoración del Holocausto. Este apoyo incluyó representación de alto nivel en eventos organizados por la comunidad judía. El gobierno publicó declaraciones y eventos de organizaciones religiosas vinculados con el Holocausto en su sitio web oficial. El Parlamento organizó una sesión extraordinaria en enero para homenajear a las víctimas del Holocausto. También en enero, el gobierno emitió un mensaje nacional por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en el que Enrique Iglesias, reconocido economista y presidente de la Comisión Honoraria para la Conmemoración de los 75 Años de la Liberación de los Campos de Exterminio Nazis y la Memoria de las Víctimas del Holocausto (conocida como Comisión Aniversario del Holocausto) que fue creada por el ex Presidente Tabaré Vázquez en 2019, hizo referencia a la importancia de preservar la memoria del Holocausto. En el mensaje, Iglesias dijo "Yo creo que la memoria del Holocausto es para compartirse, para denunciarse, para

transmitirse como un monumento al 'nunca más'. Al concluir su mensaje, Iglesias dijo "Nunca más' será realidad si logramos que, ante la especificación de cada raza, creencia u opinión, todos reconozcamos la universalidad del ser humano; que ese sea el legado que nos haga recordar el día de hoy el Holocausto".

En julio, el Centro Simon Wiesenthal expresó su preocupación por el dictamen de un juez del año 2019 a favor de privados que encontraron y deseaban rematar un águila y una esvástica nazi de bronce de 350 kilos. El Centro indicó que el dictamen no garantizaba que la pieza se vendiera a instituciones y postores individuales que quisieran generar conciencia sobre el Holocausto y otras instancias de genocidios, ni tampoco que un comprador no lo usara para glorificar el nazismo. El Centro solicitó a las autoridades que garantizaran que la exhibición de estos símbolos sirviera como advertencia para futuras generaciones de algo que nunca debería repetirse, indicando que, dado el compromiso del país con la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, el gobierno estaba obligado a evitar "el uso público de símbolos que recuerden la limpieza étnica". Hasta fin de año, la pieza todavía no había sido rematada.

El 11 de noviembre, funcionarios del gobierno, incluido el Presidente Lacalle Pou, políticos y activistas de derechos humanos asistieron a la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos de 1938 (Kristallnacht) del Comité Central Israelita del Uruguay. Varios funcionarios de gobierno y políticos hicieron pública su participación en la conmemoración por Internet y resaltaron la necesidad de recordar y reflexionar, y de promover la tolerancia y la convivencia.

Sección III. Situación del respeto mostrado por la sociedad hacia la libertad religiosa

Representantes de organizaciones judías siguieron informando sobre comentarios y actividades en los medios y las redes sociales en los que se denigraban sus creencias y prácticas religiosas, se hacían comentarios antisemitas y se negaba que el Holocausto había ocurrido. En noviembre, una mujer compró un libro escrito por un autor judío a través de una plataforma digital. El vendedor solicitó el número de teléfono celular de la mujer para completar la transacción pero, en lugar de entregar el objeto comprado, ella dijo que le envió mensajes "de odio" en los que hizo referencia al Zyklon B, el gas letal utilizado en los campos de concentración nazi. Cuando el esposo de la mujer llamó al vendedor, este lo amenazó, haciendo afirmaciones tales como "Hitler se quedó corto" y "Voy a ir a tu casa y los voy a matar a ustedes y a todo el resto". La pareja, asustada porque el hombre tenía su dirección, denunció las amenazas a las autoridades. El fiscal que llevaba el caso acusó al hombre de "actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual". A

fin de año, el hombre estaba sujeto a 60 días de arresto domiciliario y a una orden de restricción mientras seguía la investigación.

Miembros de la comunidad musulmana siguieron indicando que en ocasiones fue difícil convencer a empleadores del sector privado de respetar los horarios de oración durante el horario de trabajo y obtener permiso para salir del trabajo más temprano para asistir a los rezos los viernes.

La Organización Sionista del Uruguay entregó el Premio Jerusalem 2020 a Pedro Bordaberry, ex Senador, ex Ministro de Turismo y excandidato presidencial del Partido Colorado. Este premio anual reconoce a una figura nacional importante, generalmente un representante del gobierno o un académico, por promover y defender los derechos humanos de los judíos y fomentar la coexistencia pacífica entre personas de distintos credos.

El Foro Interreligioso del Uruguay, integrado por representantes de distintos grupos religiosos y expresiones espirituales que incluye a Brahma Kumaris, la Iglesia de Jesucristo, católicos, judíos, protestantes evangélicos, afroumbandistas y bahaíes, continuó promoviendo el entendimiento interreligioso y fomentando el respeto por la diversidad religiosa mediante mayores oportunidades de diálogo y encuentro, tanto en formato virtual como presencial.

Con la llegada de la pandemia de COVID-19 y la consecuente suspensión de todos los servicios religiosos presenciales, líderes religiosos judíos y cristianos se reunieron para preparar un video para publicar en línea donde solicitaban a sus comunidades que mantuvieran la esperanza y que se cuidaran.

Sección IV. Política e interacción del Gobierno de los Estados Unidos

Funcionarios de la Embajada dialogaron sobre la interpretación del concepto de laicidad del gobierno, la falta de un homólogo en el gobierno que esté a cargo de temas religiosos, y la importancia de la tolerancia hacia las minorías religiosas y la colaboración interconfesional con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la CHRXD y de la INDDHH. Los funcionarios alentaron a los representantes del gobierno a participar en diálogos con todos los grupos religiosos.

Funcionarios de la embajada se reunieron durante el año con líderes religiosos, entre ellos representantes católicos, judíos, protestantes evangélicos y miembros de otros grupos religiosos minoritarios, así como con expertos en la materia, entre ellos académicos, abogados y expertos en derechos humanos, para dialogar sobre colaboración interreligiosa y conocer sus preocupaciones sobre temas relacionados con la fe. Estas personas expresaron su opinión sobre las actitudes del gobierno para

con la religión y los grupos religiosos y el impacto de la pandemia de COVID-19 en la capacidad de sus fieles de practicar sus religiones.

La embajada usó sus redes sociales para resaltar el respeto a la diversidad y la tolerancia religiosa, y para la conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa el 27 de octubre.